

Rama Jurisdiccional Del Poder Público
JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C
Bogotá D. C., dos de septiembre de dos mil veintiuno

Referencia: Ejecutivo No. 80-2018-00666
Demandante: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Demandados: JUAN CAMILO CASTILLO HENAO
Asunto: Sentencia Anticipada

Procede el Despacho a proferir **sentencia anticipada** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES

Itau Corpbanca Colombia S.A. demandó por la vía ejecutiva a Juan Camilo Castillo Henao, con el fin de obtener el pago de los valores incorporados en el pagaré base de la acción No. 1A10774660 con fecha de vencimiento 3 de marzo de 2018.

Reunidos los requisitos legales, mediante auto calendado 28 de agosto de 2018 (fl.13), se libró mandamiento de pago, ordenando la notificación de la parte demandada.

Ante la imposibilidad de enterar personalmente al extremo ejecutado, el Despacho mediante proveído calendado 21 de mayo de 2019 ordenó el emplazamiento del ejecutado. (fl. 19)

Surtido el trámite de que trata el artículo 108 del Código General del Proceso, se le designó a la demandada curador *ad litem* para la defensa de sus intereses, quien se notificó el 23 de octubre de 2020 (fl. 29) y propuso como medios exceptivos “*falta de los requisitos establecidos en el art 709 del código de comercio...*” y “*falta de legitimación en la causa*”.

Descorrido el respectivo traslado, se dispuso dictar sentencia anticipada conforme lo establece el artículo 278 del estatuto procesal civil.

CONSIDERACIONES

Primeramente, se ha de señalar que, el artículo 278 del Código General del Proceso, plantea que el Juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

- (i) Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
- (ii) **Cuando no hubiere pruebas por practicar.**
- (iii) Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.

Así las cosas, y como quiera que en el *sub judice* las pruebas solicitadas ya han sido recaudadas, se procederá conforme al numeral 2° del artículo 278 ibídem,

analizando así la excepción planteada por el demandado a través de curador ad-litem.

“falta de los requisitos establecidos en el art 709 del código de comercio para considerarse el documento báculo de la acción como un pagaré”

Al respecto, memórese que conforme al artículo 422 del Código General del Proceso podrán exigirse ejecutivamente las obligaciones que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, siempre que reúnan las características de ser expresas, claras y exigibles.

La doctrina ha expuesto que la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del contenido del título, es decir, esté determinada sin lugar a dudas en el documento. Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación con razonamientos lógicos jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta. Es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título en cuanto a su naturaleza y sus elementos (objeto, término o condición y si fuere el caso su valor líquido o liquidable por simple operación aritmética), en tal forma que de su lectura no quede duda seria respecto a su existencia y sus características. Y es exigible cuando su cumplimiento debía realizarse dentro de un término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acaecida, o para la cual no se señaló término, pero cuya ejecución sólo podía efectuarse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió.

De otra parte, que la obligación conste "en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él", según lo prevé el mentado canon, quiere decir que el título esgrimido debe vincular jurídicamente al deudor con relación a quien se presenta como acreedor, por haber certeza de que es su autor (autenticidad), hecho que debe constar en el título.

Colofón de lo expuesto, el título base de recaudo debe expresar completamente los términos esenciales de la obligación, como su contenido u objeto, las partes vinculadas a él, y si su cumplimiento se encuentra sujeto a una condición, de suerte que resulte inequívoca e inteligible.

Así pues, en el asunto bajo juicio, el análisis referido a si el título ejecutivo aportado como base de la ejecución reúne los requisitos que se exigen en el art. 430 *ibídem*, para poder librar el mandamiento correspondiente, no son otros que los consagrados en los art. 621 y 709 del Código de Comercio (en concordancia con el art. 422 del ordenamiento procesal civil) y dispuestos de la siguiente manera:

1. La mención del derecho que en el título se incorpora;
2. La firma de quién lo crea;
3. La promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero;
4. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago;
5. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador;
6. La forma de vencimiento.

Luego, aplicados los referidos requisitos al asunto de autos se tiene que, conforme

al pagaré obrante a folio 9 del expediente, el aquí demandado Juan Camilo Castillo Henao se obligó mediante su firma a pagar de manera incondicional el día 3 de marzo de 2018 la suma de \$46.535.165 a la orden de Itau Corpbanca Colombia S.A. Así las cosas, encuentra el despacho reunidos los requisitos en las citadas normas establecidas para inferir que el título ejecutado contiene una obligación clara, expresa y exigible de un documento proveniente del deudor.

Por lo anterior, la excepción planteada no tiene vocación de prosperidad.

“falta de legitimación en la causa”.

La legitimación en la causa, hace parte de los elementos indispensables para que se forme una relación jurídica válida y poder llegar a una determinación de fondo de lo pretendido. La ausencia de aptitud en alguno de los extremos de la litis, así como de los demás presupuestos procesales, trunca esta actividad en el Juzgador.

Es incuestionable, que la titularidad de un derecho lleva ínsita la posibilidad de ejercerlo, porque la razón natural lo impone y la ley sustancial lo faculta. Tradúcele el enunciado anterior en este postulado: solo quien es titular de un derecho, por mediar una relación sustancial con él, puede demandar en nombre propio; y aquel que tiene una relación con el mentado derecho lo puede disputar mediante la contradicción.

En el mismo sentido la jurisprudencia y la doctrina ha determinado que la legitimación en la causa consiste en la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien debe responderle, o como alguna vez lo expresó la honorable Corte haciendo suyo un concepto de Chiovenda, *“...Estos requisitos de mérito son llamados condiciones de la acción, porque respaldan y determinan su acogida y éxito. Estas condiciones consisten en la tutela de acción por una norma sustancial, en la legitimación en la causa y en el interés para obrar. Se cumple la primera de estas condiciones cuando el hecho o hechos que le sirven de fundamento a la acción (causa petendi) y la pretensión que constituye su objeto (petitum) coincide con el hecho o hechos previstos por la ley sustancial y con el efecto jurídico que esta atribuye a los mismos hechos. Apareciendo esta concordancia, resulta la acción tutelada por la ley y satisface una de las condiciones de su prosperidad. La legitimación en la causa es en el demandante la calidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligación correlativa. Y el interés para obrar o interés procesal, no es el interés que se deriva del derecho invocado (interés sustancial), sino que surge de la necesidad de obtener el cumplimiento de la obligación correlativa, o de disipar la incertidumbre sobre la existencia de ese derecho, o de sustituir una situación jurídica por otra...”¹ ”.*

Como la legitimación es una cuestión sustancial que atañe a la acción, entendida como pretensión, su ausencia, ya sea en el demandante o en el demandado, conduce forzosamente a un fallo adverso, porque, como también se lee en la providencia citada, es apenas lógico *“...que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es llamado a responder, debe denegarse la pretensión del mandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada*

¹ Gaceta Judicial Tomo CXXXI, 14.

material...”. En síntesis, la legitimación en la causa, como lo ha determinado la Corte, no es más que un “...fenómeno sustancial que consiste en la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir la obligación correlativa...”. y que debe existir al momento de accionar.

Puestas de esta manera las cosas, y conforme al anterior marco doctrinal y jurisprudencial, encuentra el Despacho que la defensa planteada no esta llamada prosperar, como quiera que del certificado de existencia y representación legal del aquí demandante y obrante a folios 5 a 7 del expediente, se desprende que Itau Corpbanca S.A mediante escritura pública No.8114 del 22 de julio de 2014 de la Notaría 29 del Circulo de Bogotá modificó su razón social a la actual, quedando debidamente acreditado que el aquí demandante es el legítimo tenedor del título cobrado.

Razones anteriores por las cuales el Juzgado despacha de manera desfavorable el medio exceptivo alegado por el curador ad litem del extremo pasivo, ordenando por ende seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago.

Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada a través de su curador ad-litem conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR Seguir adelante con la EJECUCIÓN en contra de JUAN CAMILO CASTILLO HENAO, tal como se dispuso en el mandamiento de pago de fecha 28 de agosto de 2018.

TERCERO: Ordenar el remate previo su avalúo de los bienes embargados secuestrados y de los que posteriormente se embarguen y secuestren.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito en los términos del artículo 446 del C. G. del P.

QUINTO: Se CONDENA en costas a la parte demandada. Liquidense por Secretaría.

SEXTO: Se fija como agencias en derecho la suma de \$2.500.000

NOTIFÍQUESE

FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ PARGA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO:

La anterior providencia es notificada por anotación en ESTADO
NO.065 hoy 3 de septiembre de 2021

La Secretaria

LUISA FERNANDA LOZANO LINARES

JMF

Firmado Por:

Felix Alberto Rodriguez Parga

Juez

Civil 018

Juzgado Municipal

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78cbbbfa25f2b237c0be50a4ab16aa920de208b826280fb9accf193c5ce18ce5**

Documento generado en 02/09/2021 03:50:16 p. m.